

## AMPARO.

*Juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por D. Demetrio Villagrana, en contra del Juez de lo Civil de aquella capital, por violacion del artículo 8º de la Constitucion federal.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

“Al Juzgado de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que D. Demetrio Villagrana por medio del ocurso de 18 del corriente, se queja del ciudadano Juez de lo civil de esta ciudad manifestando: que como apoderado general del ciudadano Francisco Montes de Oca, presentó á dicho juez desde el dia 11 un escrito y dos letras de cambio, demandando ejecutivamente al ciudadano Agapito Márquez, sin que en el tiempo trascurrido hasta el dia 16 se proveyera sobre su solicitud, segun aparece del certificado del actuario del Juzgado, librado en la misma fecha; por lo que, creyendo que el Juez de lo civil ha violado lo dispuesto en la 2ª parte del artículo 8º de la Constitucion general de la República, concluye pidiendo el amparo y proteccion de la justicia federal contra el hecho referido, que comprende en la fraccion 1ª, artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Pasada la copia del escrito de queja al funcionario responsable, para los efectos del artículo 9º de la citada ley, ha rendido su informe justificado sobre lo principal, y de él aparece, que aunque Villagrana presentó su demanda ejecutiva contra Márquez, en representacion del ciudadano Francisco Montes de Oca, desde el dia 11 del que rige; en 16 del mismo, el Juzgado proveyó un auto, mandando reservar la resolucion, por estar pendiente ante él mismo un juicio verbal contra el solicitante, para dar cumplimiento á la ley de 11 de Setiembre de 1867, providencia que no se le pudo hacer saber, por no haber comparecido, ni de-

terminando el lugar donde recibiria las notificaciones.

Expuestos así los hechos fundados en las constancias de autos, el Promotor encuentra, que en el caso no cabe el recurso de amparo, pues el artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869 lo prohíbe terminantemente en los negocios judiciales; y en su concepto, la mente del legislador al establecer tal prohibicion que parece estar en pugna con la fraccion 1ª, artículo 101 de la Constitucion, fué no prostituir la institucion del amparo, ni entorpecer la administracion de justicia, cuando las leyes comunes conceden recursos ordinarios y expeditos en los negocios judiciales; y así en el presente caso, contra la dilacion del juez en proveer sobre su solicitud, tuvo Villagrana varios recursos ordinarios, tales como la excitativa del gobierno para administrar justicia pronta y cumplidamente, y la responsabilidad exigida en forma ante el superior del juez moroso y prevaricador.

Pero por otra parte, visto el informe del ciudadano Juez de lo civil de esta ciudad, en el caso de que se queja D. Demetrio Villagrana, no hay violacion de garantías individuales en que fundar el amparo de la justicia federal; porque primero: si bien la parte final del artículo 8º de la Constitucion garantiza que á toda peticion debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad á quien se haya dirigido, y que su resultado se hará saber al peticionario, no fija un término dentro del cual se ha de dictar precisamente la resolucion, de tal manera, que pasados como en el caso cinco ó mas dias útiles sin proveer, se entienda violada la garantía individual que concede dicho artículo; y segundo: al escrito de Villagrana recayó el auto de 16 del corriente, mandando reservar la resolucion, por estar pendiente en su contra un juicio verbal en que se le juzga como tinterillo; y con este auto quedó obsequiada la prevencion de la segunda parte del artículo constitucional, así como igualmente cumplidas, con la nota puesta en seguida por el Juzgado de lo civil,

de no haberlo hecho saber al solicitante, por no haber comparecido ni señalado lugar para recibir las notificaciones, las disposiciones de los artículos 76 y 79 de la ley orgánica para la administración de justicia en los tribunales del Estado.

En virtud, pues, de lo expuesto, y no pudiendo otorgarse amparo de garantías cuando falta su violación, el Promotor fiscal concluye pidiendo al Juzgado se sirva declarar: que la justicia de la Unión no ampara ni protege á D. Demetrio Villagrana, por no haber violado el Juzgado de lo civil de esta ciudad, la garantía que menciona en su ocurso de queja; y en consecuencia imponerle la multa que para casos semejantes previene el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Así lo cree de justicia protestando lo necesario.

Zacatecas, veinticuatro de Enero de mil ochocientos setenta y uno.—*Jesus M. Li-  
cena.*"

#### *Sentencia del Juez de Distrito.*

Zacatecas, Febrero cuatro de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido por D. Demetrio Villagrana contra el Juzgado de lo Civil de esta ciudad por la violación de la 2ª parte del artículo 8º de la Constitución general, fundándose en que el Juzgado no le provoyó el ocurso que en 11 de Enero último presentó como apoderado general del C. Francisco Montes de Oca, demandando ejecutivamente al C. Agapito Márquez. Visto el informe del C. Juez de lo Civil, en el que trascribe el auto que dictó con fecha 16 del citado Enero en la referida solicitud, expresando que el Escribano actuario se separó con disgusto desde el día 15 del propio mes. Visto el pedimento del C. Promotor fiscal, en el cual se expresa que el recurso no debe admitirse conforme á lo prevenido en el artículo 8º de

la ley de 20 de Enero de 1869, mucho menos cuando la parte tiene expeditos los recursos de excitativa de justicia y responsabilidad, para entablarlos ante la autoridad competente: que en el presente caso, no hay violación de garantías individuales, porque la 2ª parte del artículo 8º de la Constitución general, no señala término dentro del cual se ha de dictar la resolución, de tal manera, que por cinco ó mas días útiles sin proveer, se entiendan violadas las garantías individuales; y por último, que decretado el auto de fecha 16 que trascribe el Juez en su informe, quedó cumplida la prevención constitucional, concluyendo con pedir que la justicia de la Unión no ampara ni protege á D. Demetrio Villagrana por no haber violado el Juzgado de lo Civil de esta ciudad la garantía mencionada en su queja, imponiéndose al actor la multa de que trata el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869. Vistos, el alegato de D. Demetrio Villagrana, en que insiste en su petición, acusando al Juzgado de lo Civil de haber violado la ley de 11 de Setiembre de 1867 y haber incurrido en responsabilidad; y todos los demás documentos necesarios. Considerando: que no hay violación de garantías individuales en que pueda fundarse el recurso de Villagrana, mucho menos cuando consta la resolución que se dictó en su ocurso de 11 de Enero: que el Juzgado ni puede ni debe calificar la expresada resolución, ni si ha incurrido el Juez en responsabilidad; y por último, que el amparo en el presente caso solo podría estenderse á una excitativa de justicia, al Juzgado de lo Civil, lo cual no puede tener lugar por haber proveído ya el Juzgado á la petición de Villagrana. Atendiendo á que las infracciones de la ley de 11 de Setiembre de 1867 no corresponde á este Juzgado el calificarlas, ni son materia del presente juicio, así como tampoco le corresponde conocer sobre la responsabilidad de los jueces del Estado, de conformidad con lo pedido por el ciudadano Promotor fiscal y lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 13 y 16 de la ley de 20

de Enero de 1869, sentenciando definitivamente este juicio, el Juzgado de Distrito del Estado, declara:

1º Que la justicia de la Union no protege ni ampara á D. Demetrio Villagrana, por no constar que el Juzgado de lo Civil de esta capital haya violado ninguna garantía individual, ni la fraccion 2ª del artículo 8º de la Constitucion general.

2º Se impone á D. Demetrio Villagrana una multa de cien pesos que enterará en la Jefatura de Hacienda, confirmada que sea esta sentencia.

3º Remítanse los autos en revision á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Publíquese esta sentencia en el periódico oficial del Estado y sáquese copia certificada para el Semanario Judicial. Hágase saber. El ciudadano Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó.—Doy fé.—*Manuel G. Solana.*—*Luis G. Chavez.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Febrero diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido en 18 de Enero próximo anterior, ante el Juez de Distrito de Zacatecas, por D. Demetrio Villagrana contra el ciudadano Juez del ramo de lo Civil de la misma ciudad, alegando: que este funcionario hasta aquella fecha, no le había proveído un ocurso que en 11 del propio mes le presentó como apoderado del ciudadano Francisco Montes de Oca en demanda ejecutiva de dinero al ciudadano Agapito Márquez; apoyando sus asertos en una certificacion del escribano actuario, y deduciendo estar violada en su consecuencia la garantía que otorga la segunda parte del artículo 8º de la Constitucion de la República: Visto el informe del ciudadano Juez contra quien se dirige la queja, en el que trascribe el auto que dictó á dicho ocurso con fecha 18 de Enero referido,

copia una razon de no haber notificado ese auto al promovente, por no haber comparecido ni determinado el lugar donde recibiera las notificaciones, y agrega, que el escribano actuario estaba con disgusto separado del Juzgado: Visto el pedimento del ciudadano Promotor fiscal que sostiene la improcedencia del recurso que se versa; el alegato del quejoso, que sostiene lo contrario, y la sentencia del Juez de Distrito que deniega el amparo pretendido. Considerando: que el Juez de lo Civil provoyó el auto en forma que refiere, con cuyo hecho cumplió la 1ª parte de la fraccion 2ª del art. 8º constitucional que se ha invocado en contra suya; y que con la nota que trascribe, puesta por él despues de su auto, cumplió con la segunda parte de la misma fraccion de aquel artículo, pues ya no estuvo en su poder notificar al promovente el resultado; de lo cual se infiere, que no hay en el caso, ni la violacion del texto que se invoca, ni por consecuencia la de la garantía que se reclama. Con fundamento de la ley de 20 de Enero, se resuelve:

1º Es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito de Zacatecas, pronunciada en 4 del presente mes, declarándose: que la justicia de la Union no ampara ni protege á D. Demetrio Villagrana, contra el Juez de lo Civil de esa ciudad, por no haber éste violado la fraccion 2ª del artículo 8º de la Constitucion federal.

2º Se confirma la multa de cien pesos impuesta en la misma sentencia á Villagrana.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos respecto del primer punto, y por mayoría respecto

del segundo, lo decretaron los señores Regentes, Presidente y Tribunal pleno de los Estados Unidos Mexicanos.—(Firmada.—*P. Ogaz*

—J. M. Lafragua.—P. Ordaz.—Ignacio Ramírez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Anza.—S. Guzman.—L. Guzman.—Luis M. Aguilar, secretario.

Son copias. México, Febrero veintidos de mil ochocientos setenta y uno.—Agustín Peralta, oficial mayor.

## TERRENO BALDIO.

*Adjudicación en propiedad verificada en el Estado de Chiapas.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

“Ciudadano Juez de Distrito:

El ciudadano Pilar Rodríguez denunció en Octubre de 1854 el terreno nombrado Jesus María, que estaba poseyendo y cultivando, y había denunciado desde el año de 1844; para reducirlo á propiedad con arreglo á la ley entonces de la materia, acreditó la nacionalidad de los terrenos y una posesión de ocho á doce años, pues los testigos que adujo son varios en este particular. El denuncia lo fué admitido y las diligencias pasaron al agrimensor.

El 10 de Setiembre de 1870, la Sra. Isidora Rodríguez, viuda del ciudadano Pilar Rodríguez, y los herederos de este, vendieron con licencia judicial al ciudadano Isidoro Gurría la expresada finca Jesus María con todos sus enceros: que ajustada la compra venta por el precio de dos mil cuatrocientos cincuenta y un pesos, quince y medio centavos, el ciudadano Gurría manifestó que la tal compra era hecha á favor de su señora madre política, Petrona Ramos, á quien quedó fincada la compra venta expresada; que en este estado se siguió el juicio de denuncia, se le han dado los trámites de la ley y no ha habido oposición: que por virtud de lo expuesto que es lo que arrojan las constancias de estos autos, se está en el caso de adjudicarlos en propiedad á la Sra.

Ramos; pero que es de considerarse: que está probada la posesión, el cultivo y aun el asentamiento: que aunque la parte no haya solicitado la gracia que la ley de la materia le otorga, es un precepto legal estar á lo probado, como lo es también el de arreglarse á lo que previene el artículo 5º de la ley de 22 de Julio de 1863, debiendo también considerarse que la Sra. Ramos es colindante y debe pagar la alcabala que previene el artículo 28 de la misma ley, esta promotoría pide: que se adjudique en propiedad á la Sra. Petrona Ramos el terreno denunciado nombrado Jesus María, con la rebaja del precio que manda el artículo 5º citado, pagando la alcabala que dispone el 28 y reponiendo las fojas 3ª y 4ª con el papel del sello correspondiente.—Promotoría fiscal de Hacienda. Chiapas, Febrero seis de mil ochocientos setenta y uno.—José Velasco Sanchez.”

### *Sentencia del Juez de Distrito.*

“Juzgado de Distrito del Estado de Chiapas.

Chiapas, Febrero ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos: de conformidad con el pedimento fiscal que precede y por sus fundamentos, este juzgado definitivamente resolviendo ha venido en declarar y por la presente declara:

1º Se adjudica en propiedad y sin perjuicio de tercero á la Sra. Petrona Ramos de Rabelo, vecina de pueblo Juárez del departamento de Pichucalco, el terreno nacional en que está situada la finca denominada Jesus María, ubicada en aquella misma jurisdicción y compuesta de mil ciento cuarenta y una hectáreas, doce aras y diez cortiaras; debiendo gozar la interesada de la baja de la mitad de su precio de tarifa y satisfacer el veinticinco por ciento de alcabala extraordinaria.

2º Hágase saber á quienes corresponda; remítase á la Gefatura superior de Hacienda.